



Poder Judicial de la Nación

CI

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN  
23000065535853



TRIBUNAL: CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

FECHA DE RECEPCIÓN EN NOTIFICACIONES:

Dr.: MIRIAN GRACIELA MEDINA  
Domicilio: 27123840742  
Tipo de Domicilio: Electrónico  
Carácter: Sin Asignación  
Observaciones Especiales: Sin Asignación

	1265/2021					N	N	N
Nº ORDEN	EXPTE. Nº	ZONA	FUERO	JUZGADO	SECRET.	COPIAS	PERSONAL	OBSERV.

Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:  
GOITIA, JORGE ALBERTO c/ ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL - ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

, de abril de 2023.

Fdo: CYNTHIA ESTHER ORTIZ GARCIA, SECRETARIO DE CAMARA

En .....de.....de 2023, siendo horas .....  
Me constituí en el domicilio sito en.....  
.....  
Y requerí la presencia de.....  
y no encontrándose .....  
fui atendido por: .....  
.....  
D.N.I; L.E; L.C; Nº.....  
Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien manifiesta ser:  
.....  
.....



## Poder Judicial de la Nación

*Acto seguido, e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de .....*

*procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente*

*FIRMADO ANTE MÍ PARA CONSTANCIA.-*



Poder Judicial de la Nación  
**CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES**

En la ciudad de Corrientes, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veintitrés, estando reunidos los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, Dres. Ramón Luis González y Selva Angélica Spessot, asistidos por la Sra. Secretaria de Cámara, Dra. Cynthia Ortiz García de Terrile tomaron conocimiento del expediente caratulado: “Goitia, Jorge Alberto c/Estado Nacional –Poder Ejecutivo Nacional- Administración Federal de Ingresos Públicos s/Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad”, Expte. N° FCT 1265/2021/1/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes.

Efectuado el sorteo a los efectos de determinar el orden de votación, resultó el siguiente: Dres. Ramón Luis González, Mirtha Gladis Sotelo de Andreau y Selva Angélica Spessot.

SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

-¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

-¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS EL DR. RAMÓN LUIS GONZÁLEZ DICE:

CONSIDERANDO:

I) El objeto procesal de autos es una acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad, en los términos del art. 322 del C.P.C.C.N., contra la AFIP en relación con su pretensión de aplicar y exigir al actor el pago del “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” establecido por la Ley N° 27605 y reglamentado por el Decreto N° 42/2021 y la Resolución General (AFIP) N° 4930/2021. Solicitó se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad de la normativa cuestionada y de la pretensión del Fisco, por ser violatoria de las garantías y principios constitucionales de no confiscatoriedad -arts. 14, 17, 28 y 33 de la Constitución Nacional- y capacidad contributiva (arts. 4, 16, 17, 28 y 33 de la Constitución Nacional). Concretamente, pretende un





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

pronunciamiento que, mediante la declaración de invalidez constitucional de la normativa cuestionada, ... “ despeje el estado de incertidumbre” ... en el que se encontraría “... generado por la pretensión del Fisco plasmada en el formulario de inicio de inspección relativa al Aporte”. (Cfr. fs. 1 vta, “in fine” y 3 vta penúltimo párrafo). En cuanto a la falta de certeza respecto de la constitucionalidad de la pretensión del Fisco de exigir el ingreso del Aporte a partir de la normativa que cuestiona, advirtió sobre el “perjuicio económico” que le causaría el ingreso de la suma estimativa de treinta y siete millones, ocho mil con ciento ochenta y ocho - \$37.008.188- más intereses y multa, monto que estimó “desproporcionado y confiscatorio” (Cfr. fs. 05, 3er párrafo).

La demanda la interpuso el actor, Jorge Alberto Goitia, -por abogado que litigó en el doble carácter - contra el Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional – y contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En prieta síntesis, alegó que el aporte que le impone el art. 2 de la Ley 27605 -y sus normas reglamentarias- le causa un “daño concreto” por cuanto, al sumarlo con otros impuestos nacionales que tributó en el ejercicio 2020, le resultaría “confiscatorio” en relación a la “renta” obtenida en tal período. Señaló que el “aporte” dispuesto por Ley 27605, cuya inconstitucionalidad intenta que se declare, absorbería una parte sustancial de la “renta” de mención, utilizando ese parámetro para concluir que excedería los límites razonables de imposición.

Sostuvo que, conforme a la pericial contable de fs. 81/86 vta surge que, un 73 % sobre ella equivaldría a la suma de pesos: cincuenta millones ochocientos cincuenta mil novecientos quince, con 32 centavos \$50.850.915,32 (Anexo A, punto 5).

Asimismo, afirmó que del anexo citado punto 2 resulta que el aporte representa un 2.68% sobre la totalidad de bienes que equivale a mil trescientos ochenta y un millones, ochocientos veintitrés mil ciento veintiséis, con doce centavos (\$1.381.823.126,12).

II) En la oportunidad procesal de fundar su recurso, -fs 115/118- la Administración Federal de Ingresos Públicos, reiteró su planteo relativo a la inadmisibilidad





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

de la vía escogida por el accionante, expresando que no existiría en autos el “estado de incertidumbre” sobre la relación jurídica que la justifique a tenor de lo prescripto por el art. 322 C.P.CyC.N. ya que, no habría dificultad de interpretación de la normativa cuestionada, ni se habría indicado un acto en ciernes al que se atribuyera ilegitimidad y/o lesión al régimen general; que no procedería la acción meramente declarativa, en supuestos en los que sólo se trate de una indagación meramente consultiva o especulativa, como sería la que nos ocupa. Citó doctrina y jurisprudencia que consideró aplicables a la temática en examen.

Explicó -la apelante- que el actor contaba con las vías procedimentales dispuestas especialmente para despejar dicha situación de duda. (Refirió, especialmente, a las normas de la Ley de Procedimiento Tributario N° 11683).

Agregó que el juez a-quo habría omitido el “adecuado tratamiento” de lo que su mandante planteara al contestar la demanda, en el sentido que, de conformidad con el sistema autodeclarativo en uso por el organismo accionado, surgiría que el actor no habría presentado declaración jurada alguna, habiéndose, en consecuencia, iniciado la fiscalización correspondiente, la que –señaló- se habría visto interrumpida por la medida cautelar oportunamente concedida por el tribunal de primera instancia; pero que además, retomado el trámite de la fiscalización que compete a la AFIP y, una vez que ella fuera concluida con el informe final de inspección, debería sustanciarse un procedimiento de determinación de oficio –art 16 y siguientes de la citada Ley 11683, que contemplaría la posibilidad de ofrecer y producir prueba y, de alegar, en consecuencia. (Remitió, asimismo a los arts. 76, 81, 82, 86 y concordantes de la ley de referencia).

Desde otro orden de ideas, criticó la sentencia en crisis por considerar solo “aparente” su fundamentación y por la omisión de tratamiento de la naturaleza jurídica del aporte en examen, no obstante lo cual, el magistrado habría concluido que sería un “verdadero impuesto”. Explicó que el aporte no lo es, sino que su naturaleza sería la de las contribuciones previstas en art. 4 C.N. al consignarse, en el art. 7 de la Ley 27605, las “asignaciones específicas” de tal aporte; que esta naturaleza jurídica resultaría de sus





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

particulares características: a) su ingreso por única vez, b) la situación de emergencia en la que se enmarcaría y c) su asignación específica; que además, no estaría en discusión el cumplimiento del requisito de legalidad o reserva de ley. Transcribió el artículo 79 C.N, incisos 2 y 19, en relación a la facultad del Congreso de la Nación de “Proveer a lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social”... y a imponer contribuciones... “ siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan”...

La apelante insistió en que el juzgador habría prescindido del estudio del momento histórico en el que se dictó la Ley 27.605, que surgiría de las consideraciones vertidas en el debate parlamentario.

Advirtió que en autos, no resultaría aplicable el precedente “Candy” de la Corte Federal citado por el magistrado pues, éste se ceñiría a un caso de corte netamente tributarista –aplicación del ajuste por inflación al Impuesto a las Ganancias- que, en nada sería asimilable –a su criterio- a la implementación del aporte enderezado a tutelar el “bien común”, por lo que no podrían aplicarse los parámetros del citado precedente, en este momento histórico y ante la “situación de emergencia” que se quiso morigerar con el dictado de la ley que poseería entidad y finalidad propias lo que ... “justifica una interpretación más amplia de las facultades atribuidas constitucionalmente al legislador”; que al poder político – poderes ejecutivo y legislativo- le incumbiría la facultad de evaluar la situación de emergencia y optar por la decisión menos gravosa para superarla, máxime considerando la crisis que afectaría más directamente al “grupo vulnerable” de la población, contexto histórico que devendría suficiente como para diferenciarlo de los Impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias. Resaltó la “gravedad institucional” que revestiría invalidar el régimen legal en trato con implicancias para el Estado Nacional que se vería impedido de llevar adelante las actividades previstas para paliar los efectos de la pandemia.

Señaló que el sentenciante, sin desconocer que el aporte grava al patrimonio del contribuyente, habría convalidado la pericial contable que efectuara el cálculo sobre la





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

“renta” del año 2020, desconociendo así, los términos del artículo 2 de la ley que lo creó que referiría a... “la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior”.... Destacó que el legislador habría decidido considerar el patrimonio –y no la renta” por representar una “exteriorización de la capacidad contributiva” de los sujetos obligados al pago atento a su potencialidad, y garantía de seguridad contra riesgos económicos” (Citó la teoría del riesgo sistémico del tributarista Dr. Tulio Rosembuj).

Advirtió, asimismo, que el juzgador de la instancia de origen habría asimilado dos instrumentos de distinta naturaleza –el ASE y el Impuesto a los Bienes Personales-, prescindiendo de la letra de la ley que exigiría valorar el peso del patrimonio del contribuyente y no “la rentabilidad que puede generar” (Remitió al fallo de la C.S.J.N “Doña Rosa Melo de Cané s/Sucesión Testamentaria” –Fallos 115:111- en el que, el Alto Tribunal, habría hecho referencia al 50% del valor de los “bienes”, no de las “rentas”); que, por lo tanto sería irrazonable lo afirmado por el juez de origen en cuanto estaría probado que el aporte “excedería la capacidad económica o financiera del accionante”, y que el monto a abonar en tal concepto “aniquila su patrimonio”, probanza que consideró indispensable para que prosperara la tacha de confiscatoriedad; que de la documental aportada por el actor y del Anexo A de la pericial contable, resultaría lo contrario, es decir, la existencia de “capacidad contributiva” de aquél; que para valorar este requisito el sentenciante debió ponderar el porcentaje de afectación del 2.68 % del patrimonio actual que surge de esas pruebas.

Concluyó señalando que la tenencia de moneda extranjera no genera renta por lo que el pago del aporte con tal moneda “disponible” no produciría “descapitalización” como entendió aquél.

III) Corrido el traslado de ley del recurso sintetizado “ut supra” el actor lo contestó, en un extenso memorial que se sintetiza en honor de la brevedad. Manifestó, en lo esencial que, la expresión de agravios carece de una crítica razonada y fundada contra la sentencia, que se repiten párrafos ya introducidos en oportunidad de producir el informe del art. 4 de la Ley N° 26.854 y de contestar demanda, lo que implicaría una técnica procesal inadecuada para





Poder Judicial de la Nación  
**CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES**

intentar revertir un fallo. Alegó que no se habría demostrado la arbitrariedad del fallo recurrido; que por ello, el recurso sería insustancial e infundado.

Entendió que la valoración de la prueba producida en autos, en especial el informe pericial contable, habría sido adecuada y conforme con los parámetros procesales.

Afirmó que para la declaración de invalidez constitucional de la norma cuestionada, resultaría idónea la vía del art. 322 del CPCCN, invocando el cumplimiento de los recaudos exigidos por el código de rito.

Sostuvo que la naturaleza tributaria del aporte solidario sería la de un impuesto, que en el caso concreto, resultaría confiscatorio y violatorio de las garantías constitucionales, resultando su imposición, una prestación pecuniaria coactiva, del Estado a un particular, fundada en ley; que el aporte constituiría un incremento encubierto del impuesto ya existente sobre los bienes personales, el cual debería ser soportado por la renta del contribuyente y no por su capital en razón del principio de intangibilidad del capital.

Puso de resalto que el hecho actual de emergencia sanitaria originada por la pandemia del COVID-19, no constituiría basamento suficiente que justifique la creación del mencionado aporte solidario, considerando que dicho gravamen resultaría ser violatorio del derecho a la propiedad tutelada constitucionalmente. Citó jurisprudencia en apoyo de sus dichos, solicitando que se rechace el recurso impetrado y se confirme la sentencia de grado.

IV) Puesta a estudio la cuestión que habilita esta instancia y, verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad formal, corresponde, ingresar a los agravios relevantes para la solución de esta causa. Ello, no sin antes dejar sentado que, los jueces no estamos obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones o argumentos, bastando que nos hagamos cargo de los conducentes para la decisión del litigio. (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320; 294:261).

Se entiende también de particular importancia para la justa composición de los intereses en juego, aclarar que, en virtud del principio republicano de división de poderes, no es función del Poder Judicial, juzgar... “ la bondad de un sistema fiscal para buscar los







Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos 223:233; 318:676).

En cuanto a la admisibilidad de la vía elegida por el actor, para plantear la existencia de un estado de incertidumbre respecto de la relación jurídica entre las partes, se advierte que, si bien la normativa en cuestión, especialmente la ley que crea el aporte ordinario y extraordinario N° 27605, es clara –en el sentido de gravar la totalidad de sus bienes existentes en el país y en el exterior a la fecha de su entrada en vigencia, 18/12/2020 y, su art. 2 inc a) en cuanto lo tipifica como sujeto de aporte, empero, de ello no puede concluirse que la pretensión del actor se reduzca a una “indagación meramente consultiva o especulativa”, pues, en autos, existe un verdadero “caso” en el que esta Cámara se expedirá sobre la adecuación constitucional y convencional –o su inexistencia- del “aporte” prescripto por Ley 27605 respecto del contribuyente Sr Jorge Alberto Goitia que demuestra un “interés jurídico suficiente” para el planteo de autos.

Ante la invocación de que la aplicación de la ley ocasionaría al actor una violación a sus derechos constitucionales –arts. 4, 14, 16, 17, 19, 28, 33, 75 inc 22 C.N.- se considera admisible, en esta instancia, la acción meramente declarativa que incoara, pues, con la producción de la prueba pericial suscripta por la perito contadora Gloria del Carmen Jiménez, se abrió la vía, estando ello consentido.

Con tal apertura, se cuenta con un elemento de convicción técnico e imparcial, sujeto a la sana crítica de esta Alzada, que, en el caso, no advierte constancias que enerven su valor. Ello así, sin perjuicio de que exige del juzgador una apreciación más prudente a la hora de expedirse sobre la procedencia de la demanda pues, está llamado a examinar, en autos, si la normativa emanada de la autoridad con competencia constitucional para su sanción, vulnera o no principios constitucionales o convencionales, cuestión que es de “ultima ratio” en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de la presunción de validez de los actos dictados por autoridades constituidas. (Cfr. Fallos 322:2139, entre muchos otros).





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Y, si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Gomer” – Fallos 310: 142- estableció como requisito para la procedencia de la vía del art. 322 C.P.C Y C.N, la inexistencia de otro medio legal para poner fin al estado de incertidumbre alegado, en este estadio procesal, resultaría violatorio a la “tutela judicial efectiva” y a la directiva del Preámbulo de nuestra Carta Magna de “afianzar la justicia”, reconducir el expediente, a otra vía, pues ello afectaría las garantías citadas y ocasionaría a la parte una dilación innecesaria, máxime cuando con los elementos probatorios adjuntos a la causa, este Tribunal, se halla en condiciones, de efectuar el control de constitucionalidad solicitado, pues, además, se trata de un “deber” que la judicatura puede ejercerlo aun de oficio. (Cfr. Fallos 324:3219). Un criterio contrario importaría adoptar un “exceso ritual manifiesto” incompatible con la búsqueda de la verdad real y con un adecuado “servicio de justicia”. (Cfr. El conocido precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Colalillo, Domingo c/ Cía de Seguros España y Río de la Plata)

Por todos los argumentos que anteceden, se confirma la admisibilidad de la vía intentada por el accionante a fin de cuestionar la “constitucionalidad y convencionalidad” de la ley que creó el aporte y su normativa reglamentaria (Decreto 1024/2020 y Res Gral AFIP N°4930/2021).

Superado este obstáculo procesal materia de agravio, corresponde examinar el gravamen vertido contra la afirmación del juez a-quo relativa a la supuesta “inexistencia de capacidad económica” del Sr. Jorge Goitia para hacer frente al pago del aporte en estudio.

De la mera confrontación de la pericia contable producida en autos, resulta lo contrario. En efecto, para verificar la existencia o no de capacidad contributiva en el actor, tengo presente el punto 1. Detalle de los bienes en el país, del que surge que el contribuyente que promovió esta acción, poseía al último ejercicio cerrado al 18/12/2020 las siguientes sumas de pesos: ciento ochenta millones quinientos diecinueve mil, seiscientos treinta y ocho con noventa centavos -\$180.519.638,90- en moneda extranjera y la de un millón trescientos treinta y dos, quinientos cincuenta y ocho, con noventa y dos centavos -\$1.332.558,92-, en





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

cajas de ahorro y cuentas corrientes con lo que resultaría enervado el citado argumento del sentenciante -sobre falta de capacidad económica- y también lo está el razonamiento concerniente al embate de esta ley contra la “preservación del capital” pues el monto total a pagar en virtud de esta ley de emergencia sería estimativamente -conforme a prueba acompañada por la actora, al solicitar la cautelar, y a la pericia contable- aproximado a una cantidad de pesos treinta y siete millones ocho mil ciento ochenta y ocho con ocho centavos - \$ 37.008.188,08-. Dicha cantidad sobre el patrimonio total del accionante de pesos: mil trescientos ochenta y un millones, ochocientos veintitrés mil ciento veintiséis, con doce centavos-\$1.381.823.126,12- representa un porcentaje de 2.68 % al 18/12/2020 según la respuesta de la perito contable a la pregunta efectuada por la apelante al respecto, suma ésta que el Sr. Jorge Alberto Goitia puede ingresar conforme a la totalidad de los bienes existentes en el país y en el exterior.

Ello así, se acoge el agravio de la recurrente en cuanto a la ausencia de “prueba contundente” en relación al perjuicio que ocasionaría al accionante pagar este aporte, más allá de su evidente disconformidad que deviene asimilable a la de todo contribuyente frente al pago, al Estado, de una prestación económica compulsiva. Tales requisitos -la contundencia y su prueba concluyente- respecto de la prueba resultan ser una exigencia que surge de pacífica doctrina de nuestra Corte Federal. (Cfr. Fallos 220:1082, 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado sentado que diversos factores, entre ellos, la diversa relación de determinadas especies de impuestos con el “bienestar general”, derivada de la clase de riqueza o actividad gravada, puede justificar que la determinación del límite de imposición varíe en más o menos, porque... “Dicho límite no es absoluto sino relativo, variable en el tiempo y aun susceptible de diferenciaciones en un mismo tiempo” (Fallos 210:855, entre otros). Por tal razón, en estos casos, la Corte puso especial énfasis en la actividad probatoria enderezada a acreditar la supuesta confiscatoriedad de la imposición económica coactiva del Estado, la que, insisto, no resulta concluyentemente





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

probada.

Atento a la ausencia de prueba contundente sobre la afectación de la real “capacidad contributiva” del actor, no comparto lo afirmado por el juzgador de la instancia de origen, en cuanto consideró que el aporte resulta desproporcionado, irrazonable, atentatorio contra el “principio de preservación del capital”

En lo atinente al hecho alegado por la accionante sobre la superposición de este “aporte” con otros impuestos nacionales que, conforme a la sentencia apelada, en el ejercicio 2020, afectaría en un 73 % su renta, caben destacar dos cosas fundamentales: 1) que, la existencia de superposición impositiva no es “per se” causal de inconstitucionalidad (Fallos 210:500; 327;1729; 263:534) entre muchos otros) y, 2) que la ley prescribe que la imposición es sobre la totalidad de los bienes existentes en el país y en el exterior. Es relevante señalar que está acreditado –como ya lo he adelantado- que la imposición de la Ley 27605 representa un 2.68% sobre esos bienes (Cfr. respuesta de la perito designada, C.P. Gloria del Carmen Jiménez, al punto propuesto por la recurrente); que tal norma además de superar el examen de legalidad –no discutido en este expediente- ha sido dictada en el año 2020, signado por un grave estado de perturbación económica, social, laboral, sanitaria, que es de público conocimiento, a raíz de la pandemia del Covid 19, que golpeó al mundo entero y que, a diferencia del impuesto a las ganancias y a los bienes personales -que también tributa el actor-, es requerida, por única vez, sobre la totalidad de sus bienes. Por lo demás, del artículo 7 de la ley, surge sin hesitaciones, a qué sectores, serán asignados los recursos obtenidos a través del aporte solidario y extraordinario que nos ocupa. (Me remito a su texto expreso “brevitatis causa”).

En cuanto a la exigencia de “temporalidad” de la emergencia, si bien no pudo establecerse un plazo máximo o cierto de ella, la norma en estudio no genera dudas respecto de que, la carga legal es, por única vez, como ya se expresó en párrafo anterior.

El uso del método exegético, racional y/o lógico, lleva al Tribunal a decidir que, cuando la ley es clara ha de estarse a la voluntad del legislador, órgano competente para la





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

creación de impuestos, determinación de alícuotas y demás temas tributarios, por lo que debe también rechazarse el agravio sobre la confiscatoriedad del aporte por múltiple imposición con los impuestos a las ganancias y a los bienes personales.

Además de la aplicación del método de interpretación de normas citado, deviene de suma importancia el examen teleológico del aporte creado que está destinado –conforme a la letra del art. 7 de la ley – a toda la comunidad, incluido el sujeto obligado al pago, que ostentan un “interés extraordinario” en superar la impensada crisis que generó la pandemia.

Revocada como resultará, la sentencia de primera instancia, las costas y honorarios deberán adecuarse al pronunciamiento que, en definitiva, dicte este Tribunal. (art 279 del C.P.C y C.N).

Atento a que el actor pudo sentirse, razonablemente, con derecho a accionar y, a la novedad que reviste la cuestión planteada, propongo que los gastos causídicos se soporten en el orden causado en primera instancia y, por el actor en esta Alzada. (art 68 C.P.C y C.N).

En cuanto a la regulación de los honorarios de primera instancia, se advierte que el representante del actor -que debía hacerse cargo del 50% de las costas- no la ha apelado en nombre de su mandante, ni en el propio –tampoco lo hizo la apoderada de la AFIP respecto de los honorarios de la perito contable interviniente-, por lo que, si bien podría esta Cámara, dejar ambas regulaciones sin efecto, considero atinado, mantenerlas teniendo en cuenta que no fue agravante para las partes interesadas y, apreciando las pautas establecidas en el art. 16 de la Ley 27423, que fueron invocadas el sentenciante de grado inferior, como el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada, la naturaleza, complejidad de la cuestión planteada, el resultado obtenido, la probable trascendencia de la resolución para futuros casos y la trascendencia económica y moral que para el interesado reviste la cuestión en debate.

Aprecio que, en el caso, resulta destacable la ardua labor argumentativa del representante del actor -en su extenso responde-, sumado a la trascendencia y novedad de este precedente para causas similares. Asimismo observo que, sin perjuicio de que la vía del





Poder Judicial de la Nación  
**CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES**

art. 322 C.P.C.yC.N. tiene por objeto esencial preservar la legalidad constitucional, la envergadura y consecuencias económicas de la cuestión particular en examen, no puede ser absolutamente soslayada, sino, considerada como otra pauta que informe el razonamiento del Tribunal al adecuar las regulaciones de primera instancia. (En este sentido y asimilando la vía del art. 322 C.P.C yC.N al amparo, a los efectos arancelarios, se ha sostenido que es posible considerar como “pauta” el valor económico de los bienes afectados” –C.N del T, Sala II, La Ley, t. 132, p 954 N°13788-S-entre otros-, o la “significación de la lesión restrictiva” -Cfr. “Ferrer, Baltasar M. c/Fisco de la Provincia s/ amparo, C.8ª. Civ. Com Córdoba 13/04/1988, entre otros-).

Así, el tope mínimo previsto por el art 48 de la citada ley, es decir, 20 UMAs, -que en pesos son, doscientos noventa y ocho mil, seiscientos sesenta (\$298.660) conforme a lo establecido por la Acordada N° 09/23 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, determinado por el juez de la instancia anterior, deviene –a mi criterio- exiguo, dada las circunstancias ya meritadas y la particular y excepcional relevancia económica que reviste el caso en examen para decidir sobre la alegada confiscatoriedad del aporte en cuestión. En efecto, para decidir sobre la constitucionalidad de la normativa cuestionada, hubo de requerir una prueba pericial contable sobre el patrimonio del Sr. Jorge Alberto Goitia, a fin de determinar si esa cuestión de hecho, aparecía “contundentemente probada”.

Por las razones expresadas, entiendo que tanto los honorarios del apoderado del actor, como los de la perito actuante -\$54.000-, deberán ser prudentemente elevados, respetando también el derecho de “acceso a la jurisdicción” que tampoco se puede vulnerar con sumas exorbitantes. En consecuencia, propongo fijar los estipendios del Dr. Carlos Hernan Kopetko en la siguiente cantidad de pesos: cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa -\$449.790-, equivalente a 30 UMAs Acordada N° 09/23 C.S.J.N y los de la C.P.N. Sra. Gloria del Carmen Jiménez en el monto de pesos: doscientos un mil, ochocientos seis -\$201.806 -equivalente a la cantidad de 13.46 UMAs.





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Los emolumentos del representante del actor, se fijan apartándose del porcentaje que prevé el art. 30 de la ley arancelaria para fijar los emolumentos de segunda o ulterior instancia pues, el 30 % que considero correspondería al representante del vencido en el recurso -\$ 134.937- surge también exiguo atento a la extensa y compleja contestación de agravios que, también fue considerada para así resolver.

Teniendo presentes algunas de las pautas prescriptas por el art 16 de la norma arancelaria: la trascendencia económica y jurisprudencial de la causa, su novedad y, la ardua labor efectuada por el representante del actor, entiendo equitativo elevar el monto citado a la cantidad de pesos doscientos quince mil, trescientos treinta y cuatro-\$215.334- equivalente a 14.42 UMAs Acordada N° 09/23 C.S.J.N. Conforme a las mismas consideraciones fijo el monto de los honorarios de la Dra Mirian Graciela Medina y de su patrocinante Mariela Inés Riera, en conjunto, prescindiendo del tope del art. 30 de la ley arancelaria, en la cantidad de pesos doscientos cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y uno -\$253.861- equivalente a 17 UMAs Acordada N°09/23 C.S.J.N más IVA, en ambas instancias, si correspondiere. Así voto.

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA DOCTORA SELVA ANGÉLICA SPESSOT DICE: que comparte los fundamentos vertidos por el Sr. Vocal preopinante, por lo que adhiere a su voto.

Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, la Cámara Federal dicta la siguiente Sentencia: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia revocar la sentencia apelada, declarando aplicable al actor la Ley 27605 y sus normas reglamentarias; II) Imponer en el orden causado las costas de primera instancia y, a cargo del actor vencido las de esta instancia; III) Regular los honorarios de la instancia de origen del Dr. Carlos Hernan Kopetko en la siguiente cantidad de pesos: cuatrocientos cuarenta y nueve mil, setecientos noventa -\$449.790- equivalente a 30 UMA -Acordada N° 09/23 C.S.J.N- y los de la perito contable C.P.N. Sra. Gloria del Carmen Jiménez, en el monto de pesos: doscientos un mil, ochocientos seis -\$201.806 -equivalente a la cantidad de





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

13.46 UMA. Los estipendios por la contestación del recurso de apelación, del Dr. Carlos Hernan Kopetko se determinan en la cantidad de pesos doscientos quince mil, trescientos treinta y cuatro -\$215.334- equivalente a 14.42 UMA -Acordada N° 09/23 C.S.J.N- más IVA, en ambas instancias, si correspondiere y los de la Dra Mirian Graciela Medina y de su patrocinante Mariela Inés Riera, en conjunto, en la cantidad de pesos doscientos cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y uno -\$253.861- equivalente a 17 UMA Acordada N°09/23 C.S.J.N más IVA, en ambas instancias, si correspondiere.

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Cf. Acordada 05 de la CSJN), cúmplase con la carga en el sistema Lex 100 y oportunamente devuélvase sirviendo la presente de atenta nota de envío.

/// Nota: El presente Acuerdo es suscripto por mayoría absoluta del Tribunal –Arts 109 RJN y 26 del Decreto-Ley 1285/58- por hallarse en uso de licencia la Dra. Mirta Gladis Sotelo de Andreau.

Secretaría de Cámara, 24 de abril de 2023.

